Documento 1

Tema: Junta de Directores, facultades

Hacemos referencia a su comunicación de 30 de marzo de 2006, recibida en nuestras oficinas el 3 de abril del año en curso. En la misma usted solicita que le orientemos sobre la facultad de la Junta de Directores de la Cooperativa, en adelante "la Junta", para contratar a una secretaria administrativa para brindar servicios a dicho Cuerpo. En atención a su solicitud, le contestamos.

Según su comunicación, la Junta requiere orientación sobre su facultad para nombrar mediante un contrato de servicios profesionales a una secretaria que atienda los asuntos que conciernen a dicho cuerpo. Usted expone que le han dado instrucciones a la Presidenta Ejecutiva, pero que esta se niega a firmar contrato alguno alegando que su interpretación es que la Junta solo tiene derecho a contratar al auditor externo y a ella como administradora.

El asunto que nos consulta puede atenderse con las disposiciones de los Artículos 5.10 (a) 7, (b) (1), (12), (13) y (14) y el Artículo 5.11 (a) de la Ley Número 255 de 28 de octubre de 2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002", en adelante "Ley 255". Veamos.

"Artículo 5. 10 - Facultades y Deberes de la Junta

(a) Es facultad, responsabilidad y deber fundamental de la Junta **definir las políticas, normas y directrices generales relativas a la operación y funcionamiento de la cooperativa, de cuya implantación será responsable la gerencia bajo el mando del Presidente Ejecutivo**. En el descargo de dicha responsabilidad, la Junta de Directores adoptará las siguientes políticas y normas de conformidad con las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que se adopten a su amparo:

[...]

(b) Además, la Junta de toda cooperativa tendrá las siguientes facultades y deberes:

(1) **nombrar al Presidente Ejecutivo de la cooperativa**, el cual desempeñará las funciones gerenciales y administrativas de la cooperativa y ejercerá las funciones, deberes y responsabilidades adicionales que le delegue la Junta. Será deber y prerrogativa del Presidente Ejecutivo nombrar todos los demás funcionarios y

empleados de la cooperativa, así como desempeñar las funciones gerenciales y administrativas de la cooperativa, incluyendo la implantación de la política institucional que establezca la Junta;

[...]

(12) definir los parámetros para la contratación de servicios de consultores, asesores, abogados y otros profesionales, cuya orientación y servicios sean necesarios y convenientes para el funcionamiento de la cooperativa o para la planificación y desarrollo de sus actividades y el logro de sus metas y objetivos;

(13) desempeñar cualesquiera otros deberes, obligaciones y facultades dispuestas en esta Ley y en el reglamento general de la cooperativa y ejercer todas las responsabilidades inherentes a una Junta de igual naturaleza; y

(14) llevar a cabo la contratación de los contadores públicos autorizados que estarán a cargo de realizar anualmente la intervención de cuentas". (Énfasis suplido.)

Conforme el artículo antes citado, la Junta, en materia de contratación puede hacer tres cosas: nombrar al principal funcionario ejecutivo de la cooperativa, establecer los parámetros para la contratación de otros servicios necesarios y convenientes para el funcionamiento de la misma y contratar a los auditores externos que realizarán la intervención anual de cuentas. Es decir, por sí la Junta sólo puede contratar al principal funcionario ejecutivo y a los auditores externos. Esto no quiere decir que la Junta está desprovista de mecanismos para allegarse los servicios de consultoría y otros servicios profesionales necesarios para que lleven a cabo sus funciones diligentemente.

El Presidente Ejecutivo tiene, conforme al Artículo 5.11 (a) de la Ley 255, que implantar las políticas institucionales adoptadas por la Junta. Es decir, siempre que la Junta haya aprobado una política sobre la contratación de servicios profesionales y solicite del ejecutivo la contratación de tal servicio, éste deberá obrar conforme la política a esos fines aprobada.

A base de lo anterior, opinamos que siempre que la Junta esté obrando dentro de los parámetros establecidos en sus políticas sobre contratación de servicios profesionales, puede requerirle al ejecutivo que implante la misma y formalice la contratación requerida.

Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad para aclarar y disponer del asunto que nos consulta en su carta. Los mismos no constituyen una determinación oficial de COSSEC. No obstante, nos reiteramos siempre a su disposición para aclarar cualquier duda que le pueda surgir en futuras ocasiones y orientarle al respecto.

Documento 1

Tema: Junta de Directores, facultades

Hacemos referencia a su comunicación de 30 de marzo de 2006, recibida en nuestras oficinas el 3 de abril del año en curso. En la misma usted solicita que le orientemos sobre la facultad de la Junta de Directores de la Cooperativa, en adelante "la Junta", para contratar a una secretaria administrativa para brindar servicios a dicho Cuerpo. En atención a su solicitud, le contestamos.

Según su comunicación, la Junta requiere orientación sobre su facultad para nombrar mediante un contrato de servicios profesionales a una secretaria que atienda los asuntos que conciernen a dicho cuerpo. Usted expone que le han dado instrucciones a la Presidenta Ejecutiva, pero que esta se niega a firmar contrato alguno alegando que su interpretación es que la Junta solo tiene derecho a contratar al auditor externo y a ella como administradora.

El asunto que nos consulta puede atenderse con las disposiciones de los Artículos 5.10 (a) 7, (b) (1), (12), (13) y (14) y el Artículo 5.11 (a) de la Ley Número 255 de 28 de octubre de 2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002", en adelante "Ley 255". Veamos.

"Artículo 5. 10 - Facultades y Deberes de la Junta

(a) Es facultad, responsabilidad y deber fundamental de la Junta **definir las políticas, normas y directrices generales relativas a la operación y funcionamiento de la cooperativa, de cuya implantación será responsable la gerencia bajo el mando del Presidente Ejecutivo**. En el descargo de dicha responsabilidad, la Junta de Directores adoptará las siguientes políticas y normas de conformidad con las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que se adopten a su amparo:

[...]

(b) Además, la Junta de toda cooperativa tendrá las siguientes facultades y deberes:

(1) **nombrar al Presidente Ejecutivo de la cooperativa**, el cual desempeñará las funciones gerenciales y administrativas de la cooperativa y ejercerá las funciones, deberes y responsabilidades adicionales que le delegue la Junta. Será deber y prerrogativa del Presidente Ejecutivo nombrar todos los demás funcionarios y

empleados de la cooperativa, así como desempeñar las funciones gerenciales y administrativas de la cooperativa, incluyendo la implantación de la política institucional que establezca la Junta;

[...]

(12) definir los parámetros para la contratación de servicios de consultores, asesores, abogados y otros profesionales, cuya orientación y servicios sean necesarios y convenientes para el funcionamiento de la cooperativa o para la planificación y desarrollo de sus actividades y el logro de sus metas y objetivos;

(13) desempeñar cualesquiera otros deberes, obligaciones y facultades dispuestas en esta Ley y en el reglamento general de la cooperativa y ejercer todas las responsabilidades inherentes a una Junta de igual naturaleza; y

(14) llevar a cabo la contratación de los contadores públicos autorizados que estarán a cargo de realizar anualmente la intervención de cuentas". (Énfasis suplido.)

Conforme el artículo antes citado, la Junta, en materia de contratación puede hacer tres cosas: nombrar al principal funcionario ejecutivo de la cooperativa, establecer los parámetros para la contratación de otros servicios necesarios y convenientes para el funcionamiento de la misma y contratar a los auditores externos que realizarán la intervención anual de cuentas. Es decir, por sí la Junta sólo puede contratar al principal funcionario ejecutivo y a los auditores externos. Esto no quiere decir que la Junta está desprovista de mecanismos para allegarse los servicios de consultoría y otros servicios profesionales necesarios para que lleven a cabo sus funciones diligentemente.

El Presidente Ejecutivo tiene, conforme al Artículo 5.11 (a) de la Ley 255, que implantar las políticas institucionales adoptadas por la Junta. Es decir, siempre que la Junta haya aprobado una política sobre la contratación de servicios profesionales y solicite del ejecutivo la contratación de tal servicio, éste deberá obrar conforme la política a esos fines aprobada.

A base de lo anterior, opinamos que siempre que la Junta esté obrando dentro de los parámetros establecidos en sus políticas sobre contratación de servicios profesionales, puede requerirle al ejecutivo que implante la misma y formalice la contratación requerida.

Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad para aclarar y disponer del asunto que nos consulta en su carta. Los mismos no constituyen una determinación oficial de COSSEC. No obstante, nos reiteramos siempre a su disposición para aclarar cualquier duda que le pueda surgir en futuras ocasiones y orientarle al respecto.